

Apéndice

El Pentágono, la C. I. A. Kissinger y los generales de la junta chilena

En los últimos veintidós días de septiembre de 1974 ocurrieron tres sucesos dramáticos, dos en Estados Unidos y uno en Argentina, los cuales, aparentemente desconectados entre sí, fueron, sin embargo, parte de la trama que conduce a conocer el argumento completo del derrocamiento sangriento del gobierno constitucional de Chile en septiembre de 1973, la participación de sectores de poder de los Estados Unidos en él, y las maniobras que hoy se hacen para ocultar a los verdaderos actores estadounidenses de esa trágica pieza fascista.

Los tres sucesos son los siguientes:

1) El «New York Times», el 8 de septiembre, da a conocer pruebas irrefutables (con los extractos del testimonio del propio jefe de la CIA) de los esfuerzos del gobierno norteamericano, entre 1970 y 1973, para derrocar al gobierno chileno de la época.

2) El presidente de los Estados Unidos, en una conferencia de prensa sostenida el 17 de septiembre, admite como válidos los esfuerzos del gobierno de su país para derrocar al extinto presidente Allende, de Chile.

3) El 30 de septiembre, es asesinado en Buenos Aires el ex comandante en jefe del ejército chileno, general de división (R) Carlos Prats González.

Los dos primeros sucesos dejaban en claro las siguientes cosas: La CIA gastó más de ocho millones de dólares entre 1970 y 1973 para derribar el gobierno legal de Chile, y lo hizo con el visto bueno, la aprobación y la complacencia del presidente de los Estados Unidos; el secretario de estado Henry Kissinger aprobó personalmente el complot. El actual presidente de los Estados Unidos encuentra «moralmente» apropiado que la Casa Blanca conspire para cambiar gobiernos en otros países.

Hasta aquí, todo claro, excepto por un pequeño, importante, y fundamental detalle.

No fue la CIA la que tuvo un papel fundamental en los preparativos para el derrocamiento y asesinato de Allende y posterior masacre del pueblo chileno. Al revés, la CIA cometió errores de apreciación (asesinato del comandante en jefe del ejército chileno en octubre de 1970, general de división René Schneider) y de subestimación de la capacidad de organización del pueblo chileno (gran huelga empresarial de octubre de 1972). Errores que le costaron perder «el liderato» en el complot norteamericano para acabar con el gobierno constitucional de Santiago. Y no fue la CIA, sino el Pentágono quien convenció, sobornó y planificó, en unión con los actuales generales de la Junta fascista chilena, el asesinato de la democracia en mi país.

Así pues, la publicación en septiembre de 1974 de los testimonios de William E. Colby, director de la Agencia Central de Inteligencia, dados en abril del mismo año en una audiencia *top-secret* del senado norteamericano, ¿para qué servía en realidad?

Notoriamente, para dos propósitos: uno, hacer de la CIA un chivo expiatorio norteamericano de la ingerencia del gobierno de Washington en los sucesos de Chile, y, dos, para «desestabilizar» la posición del Secretario de estado Henry Kissinger en la actual política interna de los Estados Unidos.

Del segundo suceso no me ocuparé aquí porque corresponde a problemas internos de la política de los Estados Unidos, que no me incumben. Pero del primero sí me ocuparé, porque tiene que ver con el infierno que los generales del Pentágono, vía sus títeres militares en las fuerzas armadas chilenas, desataron en mi patria.

¿Para qué —podía uno pensar— se destapaba así, en septiembre de 1974, el papel intervencionista de la CIA en los asuntos políticos internos de Chile? Claro, para ocultar la culpabili-

dad de los verdaderos protagonistas del drama: los generales del Pentágono. Y eso, porque los hechos y los dichos de los generales títeres chilenos estaban causando una tal conmoción en el mundo, incluyendo la opinión pública de los Estados Unidos, que necesariamente debía llegar el momento en que los políticos de este país tuvieran que responder a la inquietud de sus electores, sobre todo teniendo en cuenta los renovadores aires de Watergate.

En suma, para nosotros los chilenos, conocedores del interior de la trama que puso al fascismo en el cuello del pueblo chileno, estaba claro la noche del 8 de septiembre que el «nuevo Watergate» desatado por el «New York Times», señalando a la CIA y a Kissinger como chivos expiatorios del golpe de Chile, ocultaba las manos del Pentágono en el suceso.

Dos hechos posteriores lo probaron. Uno ocurrió el 9 de septiembre, cuando Kissinger autorizó a su vocero, Robert Anderson, para decir que «el Comité de los 40 actúa solamente con la aprobación unánime de sus cinco miembros»... y que «el Comité de los 40 somete sus decisiones a la aprobación personal del Presidente, antes de llevarlas a cabo». («The New York Times», 11 de septiembre 1974, en la crónica «Censored Matter in Book about CIA Said to Have Relate Chile Activities»).

Kissinger esquivaba el bulto de dos formas: pasando la responsabilidad al caído señor Richard Nixon, y apuntando con el dedo a la composición de los cinco miembros del Comité de los 40, organismo superior de inteligencia de los Estados Unidos... ¡en el cual tienen mayoría de votos los representantes del Pentágono! Veamos la composición del Comité de los 40:

1) El señor Henry Kissinger que, por su cargo, tiene que tomar en cuenta los informes de seguridad nacional proporcionados por el Pentágono sobre cualquier tema importante; 2) el presidente del Estado Mayor General Conjunto (Joint Chiefs of Staff), es decir, el superjefe del Pentágono; 3) el subsecretario de Defensa, es decir, un funcionario directamente manejado por el Pentágono; 4) el subsecretario de Estado para asuntos políticos directamente bajo la presidencia de la República, y 5) el director de la CIA.

En suma, tal como lo pensó el asesinado presidente John Kennedy al crear el Comité de los 40 después de la frustrada invasión a Cuba de la CIA en 1961, este comité ponía a la CIA bajo la vigilancia del Pentágono y de la presidencia de los Estados Unidos... ¡Y eso, probablemente, era lo que quería señalar

Kissinger, a través de su vocero, el 9 de septiembre, en un intento de defenderse del Watergate que se le venía encima...! ¡señalar que si la CIA actuó en Chile, lo hizo por aprobación del Pentágono y del Presidente Nixon!

Tres semanas más tarde, vino el asesinato del ex comandante en jefe del ejército chileno, residente en Buenos Aires desde una semana después de haber triunfado la conspiración Pentágono-generales fascistas chilenos, el general de división (R) Carlos Prats González.

¿Por qué asesinar a Prats ahora? Porque Prats, como jefe del ejército chileno hasta fines de agosto de 1973, conoció las maniobras del Pentágono para derrocar a Allende, conoció el «informe Perú» del Pentágono leído a los generales chilenos en noviembre de 1972, conoció las instrucciones de jefe del Estado Mayor General Conjunto de los Estados Unidos (uno de los cinco del Comité de los 40), a los generales chilenos para derrocar el régimen constitucional de Chile, y conoció tanto todo esto, que a fines de agosto de 1973 renunció a su cargo de comandante en jefe para no ser cómplice de la desvergüenza universal que se iba a dejar caer sobre el generalato chileno a partir del 11 de septiembre.

En una palabra: el ex jefe del ejército chileno era el único testigo de graduación máxima en situación de decir que no había sido la CIA sino el Pentágono el jefe del complot para asesinar la democracia chilena. Había que asesinarlo. (Esto no es nuevo para la opinión pública norteamericana. La lista de testigos clave asesinados a propósito de los asesinatos de John Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy y otras figuras menores es interminable).

Nueve puntos

Sin embargo, es bueno acercarnos más al detalle del asunto. De acuerdo a la crónica firmada por Seymour M. Hersh, del «New York Times» del 8 de septiembre de 1974, las declaraciones del señor Colby (director de la CIA), el día 22 de abril, al Subcomité de Inteligencia sobre los Servicios Armados de la Cámara de Representantes, podrían resumirse en nueve puntos fundamentales:

1.º Las operaciones de la agencia, desde 1970 hasta 1973, fueron consideradas como una prueba para la técnica de utili-

zar fuertes pagos en efectivo a fin de derribar un gobierno considerado como antagónico para los Estados Unidos.

2.º El señor Colby afirmó también que todas las operaciones de la agencia contra el Gobierno Allende fueron aprobadas por adelantado en el Comité de los 40 en Washington, un organismo secreto de alto nivel para la inteligencia dirigido por el secretario de Estado Kissinger (...es decir, el Comité de los 40, en el cual tienen mayoría de votos el Pentágono, autorizó a la CIA su intervención de apoyo a las maniobras del Pentágono para poner a los generales títeres chilenos en el poder, destruyendo la democracia chilena).

3.º El testimonio del señor Colby indica que altos funcionarios en el Departamento de Estado y la Casa Blanca engañaron repetida y deliberadamente al público y al Congreso acerca de la magnitud de la acción de los Estados Unidos al introducirse en los asuntos internos de Chile durante los tres años del gobierno del doctor Allende (los recientes sucesos de Watergate no hacen de este hecho una novedad para el público norteamericano).

4.º El señor Colby testimonió que 500.000 dólares fueron autorizados secretamente por el Comité de los 40 en 1970 para ayudar a las fuerzas anti-Allende. Otros 500.000 dólares fueron proporcionados a las mismas fuerzas en 1969, dijo el señor Colby. (Esto tiene que ver con el primer gran fracaso de la CIA en Chile contra Allende, en octubre de 1970, cuando el Pentágono debió intervenir incluso para exigir a Nixon que ordenara a la CIA desistir de su descabellado plan para impedir que Allende fuera ungido presidente en el Congreso chileno, el 24 de octubre de ese año).

5.º Testimonió que habían sido autorizados 350.000 dólares por el Comité de los 40 en un fracasado esfuerzo para sobornar a miembros del Congreso chileno. El soborno era parte de un complot mucho más complicado cuyo fin era desconocer los resultados de la elección (presidencial), aseguró el señor Colby, pero todo el plan, aunque inicialmente aprobado por el Comité de los 40, fue más tarde rechazado por impracticable. (Es una verdadera lástima no contar en la actualidad con un testigo responsable del Pentágono, para saber si esta historia de los sobornos se repitió con los generales que actualmente mantienen al pueblo chileno bajo la bayoneta.)

6.º El director de la CIA también dijo que después de la elección de Allende, el Comité de los 40 autorizó cinco millo-

nes de dólares para mayores esfuerzos de «desequilibrio» en 1971, 1972 y 1973. Una cantidad adicional de un millón y medio fue proporcionada para ayudar a los candidatos anti-Allende en las elecciones generales del año pasado. Algunos de esos fondos fueron proporcionados, testimonió el señor Colby, a un periódico influyente anti-allendista en Santiago, al cual no identificó (a partir de 1972, esta parte del trabajo de la CIA se hizo en concordancia con el trabajo del Pentágono: mientras la CIA «desequilibraba», el Pentágono «equilibraba» a los generales chilenos en torno al plan para destruir la democracia chilena. La CIA hacía el trabajo sucio público, mientras el Pentágono hacía el trabajo sucio secreto.)

7.º El señor Harrington (representante demócrata por Massachusetts que reveló el testimonio Colby en carta del 18 de julio de 1974) señaló que «se proveyeron fondos a personas, partidos políticos y medios de comunicación en Chile, a través de canales en otros países, tanto en América Latina como en Europa... La descripción de esas operaciones por parte del señor Colby fue directa, aunque no hasta el punto de identificar los contactos y conductos reales», añadió el señor Harrington.

8.º El señor Harrington citó al señor Colby testimoniando que el Comité de los 40 autorizó un gasto de un millón para actividades de «un mayor desequilibrio político» en agosto de 1973, un mes antes de que la junta militar se hiciera con el poder en Santiago... «Todo el plan autorizado en agosto fue cancelado cuando ocurrió el golpe militar menos de un mes más tarde», escribió el señor Harrington. Agregó que, sin embargo, el señor Colby había testimoniado que habían sido gastados 34.000 dólares de esos fondos —incluyendo un pago de 25.000 dólares a una persona para comprar una radioemisora... (Esto demuestra cómo el Pentágono, por encima del Comité de los 40, y por lo mismo, por encima del Presidente Nixon, llevaba adelante su propio complot en Chile, sin contarle a nadie los detalles... ¿Cómo se llama esto? ¿Un estado dentro de otro estado? ¿Una especie de gobierno militar-industrial más arriba de la Casa Blanca cuando es necesario?)

9.º Complementando las declaraciones del señor Colby, los reporteros del «New York Times» consultaron a funcionarios de gobierno y obtuvieron esto: «en el período antes del golpe», dijo un funcionario, «en el Comité de los 40 había el convencimiento absoluto... de que el gobierno Allende estaba destinado a desmoronarse y que era necesario desacreditarlo en todos los

aspectos... El Departamento de Estado apoyaba esto, pero de un modo diferente... La discusión era entre aquellos que deseaban usar la fuerza y terminar rápidamente con él (el gobierno chileno) y los que deseaban que se desmoronara solo. Henry Kissinger estaba del lado de los primeros... Todos los funcionarios entrevistados pusieron énfasis en que la Agencia Central de Inteligencia no fue autorizada para jugar ningún papel directo en el golpe que derrocó a Allende». (Este punto es muy importante. Prueba que Kissinger actuaba según había decidido el Pentágono ya en noviembre de 1972 —derribar a Allende con un golpe militar dirigido por los generales chilenos al servicio del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que el Departamento de Estado no sabía del «plan duro» del Pentágono, y que el Comité de los 40, manejado por el Pentágono, había prohibido a la CIA entorpecer con acciones directas el complot altos mandos Estados Unidos-Chile en marcha ininterrumpida desde fines de 1972).

En suma, Kissinger, el Departamento de Estado y la CIA, aunque cómplices en el derrocamiento del gobierno constitucional de Chile, jugaron un papel secundario en comparación con el Pentágono, director verdadero de toda la trama.

¿Quién gobierna a quién?

En Chicago, el 16 de septiembre de 1970, cuando Kissinger era funcionario del Pentágono, es decir era asesor de Nixon para asuntos de seguridad nacional, dijo, de acuerdo al «New York Times» del 11 de septiembre de 1974:

«...La asunción de Allende (a la presidencia) en Chile presentará masivos problemas para nosotros, y en verdad para todo el hemisferio occidental... ustedes tendrán un gobierno comunista en un país principal latinoamericano, junto a, por ejemplo, la Argentina, que está profundamente dividida... a Perú, que ha estado ya caminando en direcciones difíciles de tratar... y Bolivia, que ha ido en una dirección más a la izquierda, más anti Estados Unidos... Estamos mirando de cerca la situación. Y ella no es una en la cual sea muy grande nuestra capacidad para influir...»

El señor Kissinger, en esta apresurada declaración hecha sólo doce días después que Allende ganara las elecciones presidenciales chilenas, cometió dos errores que sus jefes immedia-

tos en asuntos de seguridad no cometieron: primero, Kissinger calificó a Allende de comunista, lo cual estaba muy lejos de la realidad, tanto, que pocas semanas después el propio Pentágono estuvo de acuerdo con el informe de los generales chilenos acerca de que Allende podía hacer un gobierno que aplacara el ardor revolucionario del pueblo chileno, impidiendo, precisamente, la revolución social en Chile... las esperanzas del Pentágono fueron frustradas por el empuje del pueblo chileno, y en noviembre de 1972 cambió de opinión y estimó que no había otra salida... para la seguridad de los Estados Unidos... que estrangular la democracia burguesa en Chile. Segundo, Kissinger señaló públicamente el itinerario de los «esfuerzos» de las fuerzas monopólicas que gobiernan en Washington para cambiar gobiernos en América Latina: Argentina, Perú, Bolivia, Chile. Hoy, cuatro años más tarde, cada lector puede sacar sus propias cuentas, tanto en gobiernos derrocados como en conspiraciones frustradas con la marca *made in USA*.

Pero, vamos a la esencia del asunto, ¿por qué el Pentágono ordenó a los generales chilenos asesinar a Allende y a la democracia burguesa chilena? Para impedir por medio de ese asesinato real e histórico, aunque transitoriamente, que el pueblo chileno hiciera la revolución social y se liberara del control que sobre él tienen los grandes consorcios multinacionales con casa matriz en Estados Unidos. Dicho de otro modo, los generales chilenos, al derrocar a Allende, lo hicieron para proteger, primero, los intereses de grandes empresas monopólicas norteamericanas, y, segundo, los intereses de grandes empresas monopólicas chilenas.

Los hechos posteriores al 11 de septiembre de 1973 prueban este hecho, y hacen comprender por qué el Pentágono, complejo militar estrechamente ligado a los intereses monopólicos de los grandes consorcios norteamericanos, fue el jefe de toda la conspiración.

Quince días después del golpe militar, el 26 de septiembre de 1973, los generales chilenos piden al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos un préstamo de 24 millones de dólares para comprar trigo. Era el mayor crédito pedido en la historia de Chile para ese propósito al gobierno de Washington. El 24 de octubre... menos de treinta días después... fue concedido. Veinte días más tarde, el 14 de noviembre, el mismo Departamento de Agricultura concede un préstamo de 28 mi-

llones de dólares a los generales chilenos, para comprar maíz, en los Estados Unidos, por supuesto.

Es bueno saber que durante el período de Allende, tres años, ese departamento yanqui le concedió préstamos por tres millones de dólares. A los generales, en dos meses, 52 millones de dólares.

El 9 de noviembre, es decir, cinco días antes, el Manufacturers Hannover Trust de Nueva York presta 24 millones de dólares a los generales «para compra de artículos de consumo habitual».

El día 2 de marzo de 1974, el ministro de Economía de los generales, Fernando Léniz, en el periódico «El Mercurio» señala que «ya hemos concretado los siguientes préstamos: 95 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional; 10 millones de la AID; 13 millones del Banco Mundial; 93 millones del Banco Interamericano de Desarrollo; otros 50 millones del BID prometidos para septiembre, y uno adicional del mismo bando de 24 millones de dólares para 24 meses... y que «existen varias operaciones crediticias en marcha con empresas del área privada de Estados Unidos y otras naciones».

El 6 de abril, «El Mercurio» informa que el EXIMBANK ha otorgado garantía para los créditos de empresas privadas norteamericanas a Chile a corto y mediano plazo, y el general de brigada Eduardo Cano, presidente del Banco Central de Chile, dice que «la decisión de EXIMBANK muestra la confianza de la comunidad financiera internacional en las favorables perspectivas de la economía chilena»...

Al parecer, la «comunidad financiera internacional» se refiere a los Estados Unidos. Es cuestión de sacar las cuentas. 285 millones de dólares de las alegres cuentas de Léniz, más 52 millones del Departamento de Agricultura y 24 millones del Hannover Trust, hacen 360 millones de dólares para los generales chilenos en seis meses.

Hay que comparar estas cifras del Banco Central de Chile: préstamos de la misma categoría en 1967: 124 millones de dólares; en 1968: 304 millones de dólares; en 1969: 263 millones de dólares; en 1970: 148 millones de dólares; en 1971: 45 millones de dólares; en 1972: cero; en 1973, hasta el derrocamiento de Allende, cero.

Hay más cifras, como la petición de la Junta al BID, en mayo de 1974, por 297 millones de dólares adicionales. Como las nuevas inversiones de consorcios como Dow Chemical, Ge-

neral Motors, Ford Motor y ADELA, como los pagos de indemnización por 42 millones de dólares para la Cerro Corporation (el gobierno derrocado había fijado en 31 millones esa indemnización), y de 253 millones de dólares a la Anaconda (Allende había fijado una «indirecta» de 770 millones de dólares en conjunto con la Kennecott Corporation y nada en forma «directa»). La junta fue generosa «con la comunidad financiera internacional» y dio 253.000.000 de indemnización «directa» adicional a la «indirecta».

Pero no se trata de abrumar al lector con cifras. Sólo un ejemplo más que resume la pregunta de ¿quién gobierna a quién? respecto a la junta militar chilena. Este ejemplo:

En la edición del 26 de junio de 1974, página 4, del diario santiaguino «La Tercera», se leía la siguiente noticia:

«Con la asistencia del Presidente de la Junta de gobierno, general Augusto Pinochet Ugarte; el almirante José Toribio Merino, miembro de la Junta, y el ministro de Relaciones Exteriores, vicealmirante Ismael Huerta, fue inaugurada en la tarde de ayer en el edificio Diego Portales la reunión que sostienen autoridades del gobierno y representantes del sector privado de nuestro país con 168 empresas afiliadas a la Business International Corporation»... «dio la bienvenida... el general Augusto Pinochet, expresando: “Es muy significativo para nosotros que tan importante organización internacional de hombres de negocios haya decidido organizar esta convención en nuestro país”... y agregó: “En pocos días más será legalizado el estatuto del inversionista, lo que orientará y alentará a miembros de ustedes a invertir en el país CON LAS SEGURIDADES QUE POCAS NACIONES EN EL MUNDO DE HOY PUEDEN OFRECER”...»

Y Pinochet tenía razón ¡y de qué manera!

Al día siguiente, 26 de junio, Eldridge Haymes, presidente ejecutivo de la BIC (que reunió en Santiago a delegados de corporaciones como la Dow Chemical, Wells Fargo Bank, General Electric, General Motors, Gulf Oil, IBM, Monsanto, ALCAN Aluminium, y 50 otros distinguidos miembros del negocio multinacional), dijo: ...«con respecto al Pacto Andino el grupo internacional ha expresado objeciones a uno de los artículos, el número 24»... «uno de los principales intereses del grupo visitante es conocer el Estatuto del Inversionista Extranjero. Mientras no sea aprobado será difícil para cualquiera de las

empresas del Grupo adoptar una decisión final sobre sus proyectos en Chile».

Dos días más tarde, después de cuatro reuniones entre el grupo BIC de consorcios multinacionales y los cuatro integrantes de la junta Militar, el almirante José Toribio Merino, declaró: «...creemos que, objetivamente, la Decisión 24 no favorece, como era su propósito, el crecimiento acelerado de la región».

Menos de quince días después, el 11 de julio de 1974, los generales de la Junta publicaron el Estatuto del Inversionista Extranjero, en el cual se daba libertad absoluta a los capitales (naturalmente de las empresas multinacionales) para sacar ganancias del país, invertir «en igualdad de condiciones con los capitalistas chilenos», y no tener limitación en los sectores en que entrarían. Todo esto, contra la Decisión 24 del Pacto Andino, que fijaba un plazo de 15 años para nacionalizar las empresas de capital extranjero y un tope de 14 % para el traslado de utilidades al exterior. Fue un escándalo para el resto de los firmantes del Pacto Andino, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. La Junta Militar se vio obligada a enviar una misión especial a esos países, y en el diario «La Opinión», de Buenos Aires, del 5 de septiembre, reproduciendo las actividades de la misión chilena en Colombia, se escribía: «Los enviados chilenos justificaron la adopción de la medida en virtud de la *angustiosa situación económica* por que pasa su país y pidieron *comprensión para estos pecados veniales...*». Fue sólo el comienzo. En la reunión de Lima, en septiembre pasado, de los países del Pacto Andino, el gobierno militar chileno fue criticado tan acremente por los otros miembros, que la delegación chilena abandonó la reunión.

Este episodio demostraba como los generales chilenos habían destruido la democracia en mi país para garantizar al gran capital monopólico de los Estados Unidos sus negocios allí... y a qué costo... El 1 de septiembre de 1974, el abogado británico John Platts Mills, laborista, después de estar 15 días en Chile, declaraba: «El grado de represión y horror vigente en Chile supera al que reinó en Alemania en la época de la dictadura de Hitler» («La Opinión», Buenos Aires, 2 de septiembre 1974).

Y el Pentágono seguía prestando apoyo irrestricto y confidencial a los generales chilenos a su servicio. El 14 de mayo, según declaraciones a «El Mercurio» de Santiago, el embajador en Washington de los militares insurrectos, general Walter Heitman, decía: «...Las relaciones entre Chile y los Esta-

dos Unidos son excelentes... hay un manifiesto deseo de ayudarnos a resolver nuestros problemas. Las autoridades estadounidenses han demostrado ésto con hechos»...

Sí. Como, por ejemplo, la gigantesca cantidad de armas proporcionada por el Pentágono a los jefes del fascismo en Chile. De acuerdo a una denuncia del periodista chileno Hernan Uribe Ortega, en el diario «Excelsior» de México y reproducida en «La Opinión» de Buenos Aires el 11 de septiembre de 1974, más de 200 millones de dólares en armas han salido de los almacenes del Pentágono para los generales chilenos.

Esta es la lista: 24 cazabombarderos de ataque A-4-D Skyhawk; 18 a 24 cazas F-5-E Tiger II; 18 a 24 Cessnas T-37 y A-37-B; 24 aviones de entrenamiento primario tipo T-41-C Cessna; dos destructores provistos de cohetes mar-aire y mar-tierra, marmar; dos submarinos convencionales; dos barcos de desembarco de tropas tipo LST o LSM; un número indeterminado de tanques M-60 y de fusiles M-16 (AR-55) y otras armas menores.

La publicación de esta lista no fue desmentida por la Junta fascista chilena, y se limitó a despojar de la nacionalidad chilena al periodista Uribe. La pregunta es: ¿Tiene el Congreso norteamericano alguna idea de estos 200 millones de dólares en armas proporcionados por el Pentágono a los generales fascistas chilenos? ¿Para qué se está armando el gobierno títere del Pentágono de Chile? ¿Acaso para atacar al Perú, bajo pretexto de diferencias fronterizas, y hacer para el Pentágono el trabajo sucio de derribar el actual gobierno del Perú? No hay que olvidar las palabras de Kissinger aquí citadas. Según esas palabras el Pentágono ya resolvió los problemas de hacerse de gobiernos títeres en Bolivia y Chile... le fatan Perú y Argentina. No sería una novedad histórica que milifares traidores a su patria le hagan el juego a una potencia extranjera, por medio de guerras entre países pequeños.

Y ocurre que el Pentágono manejó el golpe fascista en Chile a partir de un «informe de inteligencia» enderezado contra un pretendido «revanchismo» del actual gobierno peruano. Ocurre que los generales chilenos al servicio del Pentágono han atizado una violenta campaña antiperuana a través de sus escribas en los diarios «El Mercurio» y «La Tercera», de Santiago. Es como para pensar que algo grande preparan en el cono sur de nuestra América los generales del Pentágono por medio de sus peones militares en Chile, Pinochet, Merino, Leigh y Mendoza. ¿Será una novedad el hecho de que el Pentágono esté preparan-

do una guerra en algún punto del globo y el Congreso de los Estados Unidos no tenga la menor idea?

Los hechos señalan que así está ocurriendo. Y señalan también como el Pentágono está tratando de cubrir su retirada en el caso del golpe militar chileno, desviando la atención, como único culpable, a la CIA y su jefe en el Comité de los 40, Henry Kissinger, en circunstancias que el verdadero director de la orquesta estuvo y está en el gigantesco Ministerio de Defensa de cinco lados de los Estados Unidos.

6 de octubre de 1974

Índice

Una explicación necesaria	7
1 Un «suicidio» para armar	11
2 ¿Por qué asesinaron al general?	77
3 El complot de los patrones	133
4 Los generales dicen «okey»	159
5 El general no es honorable	181
6 El infierno	243
Apéndice	287

DEL MISMO AUTOR



¿Quién mató a Kennedy? He aquí la pregunta que la humanidad viene haciéndose desde que el joven presidente fue asesinado.

Este libro trata de descifrar el enigma de un crimen brutal y repugnante, revelando la identidad de los verdaderos asesinos de Kennedy. El autor les llama LA MAFFIA, pero aclara que no se trata del grupo grotesco y sonoro de inmigrantes italianos, sino de los gigantescos consorcios de Wall Street, esos mil norteamericanos que tienen en sus manos todas las riquezas naturales del país, el reducido grupo que controla toda la maquinaria económica de los Estados Unidos, esos mil norteamericanos que gobiernan al Congreso Nacional, a la Corte Suprema y a los gobiernos de los Estados.